

El costo del petróleo:

Riqueza económica y devastación ecológica

En los últimos diez años, Loreto ha recibido miles de millones de soles en canon petrolero, pero la explotación del petróleo ha dejado una huella imborrable en el medio ambiente. Derrames constantes, emergencias ambientales y un impacto irreversible sobre las comunidades nativas son solo algunas de las consecuencias que parecen ignorarse mientras las empresas y el Estado se deslindan de responsabilidades. ¿Es sostenible el modelo extractivo en la Amazonía peruana? ¿Cómo se afronta una deuda ambiental que crece sin control?



Derrame de petróleo en Andoas. Foto: OEFA



Escribe: Dr. Luis Campos Baca, profesor principal de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, doctor en Ciencias Ambientales e investigador Renacyt

En los últimos 10 años, la explotación petrolera en la región política de Loreto, ha generado una considerable fuente de ingresos: **4.500 millones de soles en canon**. Este recurso, proveniente de la extracción de hidrocarburos en la Amazonía peruana, se distribuye a diversas entidades, beneficiando a municipios, el gobierno regional y universidades. El distrito de Puinahua y provincia de Requena (productores del crudo), recibe el 10 %, cada uno; municipalidades distritales y provinciales, donde se extrae petróleo, 40 %; Gobierno Regional de Loreto, 20 %; Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 5 %; Instituto de Investigaciones de la Amazonía

Peruana, 3 %, e institutos tecnológicos nacionales de Loreto, 2 %.

Sin embargo, mientras el dinero fluye, los efectos devastadores de la actividad petrolera sobre el medio ambiente y las comunidades locales parecen ignorarse o, al menos, no se abordan con la urgencia que el caso requiere.

El 26 de noviembre, el Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia ambiental el área (distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón) afectada por un nuevo derrame de petróleo en el río Pastaza, que recorre el corazón de Loreto. Este derrame se suma a la lista de incidentes que han marcado una tensa relación entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en una de las zonas más biodiversas del planeta.

El desastre reciente, ocurrido entre los kilómetros 11 y 12 del ramal norte del oleoducto norperuano, afectó no solo a los ecosistemas acuáticos, sino a las comunidades que dependen de este río para abastecerse de agua potable, pescar y realizar actividades cotidianas. A pesar de que el Minam ha dispuesto un Plan de Acción Inmediato, no hay

certeza de que este sea más que otro parche en un problema que se agrava con cada derrame. Los sectores deben unirse para cumplir con los objetivos de este plan.

El río Pastaza, fuente de vida para decenas de comunidades nativas (Nuevo Porvenir, Nuevo Andoas, Los Jardines, Alianza Topal, Andoas Viejo, Capahuari Urko, Pañayacu, Nueva Vista, Huagramona, Naranjal Pastaza y Nueva Vida, ubicadas aguas abajo del punto de falla), se ha convertido en una especie de “cementerio líquido” debido a la contaminación constante.

Un informe reciente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) revela que el petróleo crudo derramado se dispersó por 75 kilómetros del río, afectando más de 18.000 metros cuadrados de aguas superficiales y vegetación ribereña. Pero lo más alarmante es que, a pesar de los esfuerzos por contener la crisis, los impactos siguen acumulándose. Las especies acuáticas mueren, los peces migran y las playas donde se reproducen las tortugas se ven afectadas por la capa de hidrocarburos.

Costo social y ambiental

Es indiscutible que los efectos de esta actividad extractiva son de largo plazo, y su costo ambiental y social se acumula cada año, sin que haya una respuesta efectiva y constante. La gran pregunta que surge es: ¿quién se hace responsable de los pasivos ambientales, sociales y económicos generados por estos derrames? La respuesta es ambigua, y el Estado, junto con las empresas petroleras, parecen deslindar responsabilidades mientras las comunidades afectadas cargan con las consecuencias.

Falta estrategia

Las declaraciones de emergencia y los planes de remediación, como el aprobado por el Minam, son pasos en la dirección correcta, pero requieren de mayor rigor científico y de una verdadera estrategia de prevención. Las tecnologías empleadas para miti-

gar los efectos del petróleo derramado a menudo resultan inadecuadas, y los impactos no son evaluados con la precisión necesaria para comprender la magnitud del daño. Las autoridades y las empresas, a menudo, optan por aplicar soluciones rápidas que ocultan los efectos en lugar de abordar las raíces del problema.

Falta diálogo efectivo

Otro aspecto que agudiza la crisis es la falta de un diálogo efectivo entre las partes involucradas. Las comunidades nativas son frecuentemente señaladas como responsables de los derrames, mientras que los actores poderosos, como las empresas petroleras, suelen evadir una investigación profunda sobre el hecho. Este escenario perpetúa un ciclo de desconfianza, criminalización y, sobre todo, una falta de justicia para aquellos que verdaderamente sufren las consecuencias de estos desastres ecológicos.

El informe “Las Sombras de los Hidrocarburos”, publicado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, subraya que el sistema energético basado en hidrocarburos es insostenible y que la respuesta a las emergencias ambientales y la remediación de pasivos ha sido insuficiente. Como señala el informe, la historia de la contaminación está grabada en capas de arcilla y petróleo, como un triste registro de los derrames que no cesan.


El gran dilema de Loreto es que mientras el petróleo sigue siendo un

motor económico crucial para el país, el impacto de su explotación amenaza con destruir las mismas riquezas que se busca proteger. La región se enfrenta a una deuda ambiental y social impagable, cuyo costo se acumula con cada nuevo derrame y cada nuevo conflicto social sin resolver.

Participación comunal en toma de decisiones

Por eso, resulta urgente que el marco legal en el país se modernice y se adicione a las políticas públicas una mayor atención al monitoreo de los impactos y la remediación efectiva. Las comunidades deben ser parte activa en la toma de decisiones, y se debe avanzar en la investigación científica y la tecnología local para resolver problemas que ya han alcanzado una dimensión crítica.

El petróleo puede haber generado una fortuna en ingresos, pero los derrames y los impactos ecológicos están dejando una huella profunda que no podemos seguir ignorando. Al fin y al cabo, esta es una deuda con la naturaleza y con las futuras generaciones, una mancha negra que se extiende cada vez más en el verde de la Amazonía peruana. ¿Hasta cuándo continuaremos cerrando los ojos ante esta realidad?

Debemos actuar antes de estar en un punto sin retorno 



Derrame de petróleo en el Lote 192, en octubre del 2022, en el distrito del Tigre, Loreto, habría afectado suelo, vegetación y agua. Foto: OEFA.